

**LAS
MALVINAS
ERAN
SON
Y SERAN
ARGENTINAS**

EDICIONES

Lucha Peronista

**LAS
MALVINAS
ERAN
SON
Y SERAN
ARGENTINAS**

EDICIONES

Lucha Peronista

A Dardo Cabo

*luchador por la soberanía nacional y popular
asesinado por la dictadura en 1977.*

En la elaboración de este material se han empleado documentos presentados a la reunión sobre Argentina en el ciclo sobre Políticas Económicas Alternativas, organizado por el Instituto de Estudios Económicos de América Latina —CIDE— en abril de 1982. También fueron consultados los Cuadernos 2 y 3 del Consejo Tecnológico Peronista y los números 1 y 3 de la revista Teoría y Política editada en México. Las hipótesis fueron debatidas por un grupo de compañeros peronistas revolucionarios de la ciudad de México. Se incorporaron, además ideas y teorías sobre el desarrollo global del conflicto aportadas por otros compañeros peronistas. El presente material, de elaboración colectiva, pertenece pues al conjunto de la militancia revolucionaria.

LUCHA PERONISTA

PROLOGO

No es posible considerar la maniobra de la dictadura militar argentina en torno a las islas Malvinas sin poner de manifiesto un reconocimiento previo: esta guerra no querida, injusta, desigual y salvaje, tiene sus mártires: los soldados conscriptos. A ellos, hijos del pueblo, trabajadores, combatientes de una causa justa —la defensa de la soberanía territorial argentina—, nuestro emocionado homenaje.

A modo de hipótesis, hemos dividido en dos fases el análisis de la maniobra del partido militar. La primera, denuncia objetivos de corto plazo, sintetizables en la necesidad del poder militar de dar respuestas a la intensa crisis social y económica que aqueja a nuestro país y a su corolario: el avance popular. La segunda, consecuencia del primer paso dado, agravada por imprevisiones y errores cometidos por las FFAA, revierte la primera en un conflicto de largo plazo, no previsto, y de carácter global, que afecta al conjunto de Latinoamérica y las relaciones Norte-Sur.

No obstante, en la propia génesis de la maniobra militar —que reconoce motivaciones internas y externas se hallan las causas del cambio de características que adquiere el conflicto al prolongarse en el tiempo. La urgencia en resolver su falta de representatividad popular para defender los intereses de la Nación, condujo a los mandos a quemar etapas —que luego militarmente serían decisivas— y a buscar su legitimación por la vía de conservar una pasividad bélica que convirtiera a Gran Bratania en país agresor. Cualquier gobierno popular —a los que la acción de Galtieri intenta descalificar— hubiera estado exento de las limitaciones a punto de partida que debía superar la Junta Militar al intentar erigirse en legítimo defensor de la soberanía territorial. Lo espurio del objetivo interno es, entonces, el motivo por el cual puede calificarse a esta maniobra de irresponsable salto en el vacío.

Al elaborar este documento nos alienta la pretensión de brindar un aporte a la lucha de nuestros trabajadores, agobiados por una dictadura que es respuesta de las clases dominantes a su nivel de desarrollo social y producto de las necesidades del imperialismo a escala mundial.

Porque éstos son los enemigos, es que el presente análisis de la cuestión Malvinas se hace desde la perspectiva de la lucha de las clases populares por su liberación nacional y social: creemos que en ellas está el origen de la determinación de los militares; no en la defensa del interés nacional, que resultaría incongruente con su gestión al frente del Estado argentino. Y, además, porque concebimos esta lucha de nuestro pueblo como parte de una vasta batalla que libran todos los pueblos del orbe por la justicia, la independencia y la soberanía.

Si una óptica desde la cual puede observarse la guerra de las Malvinas es la que ofrece el intento de "blanqueo" de un pasado entreguista y genocida de la Junta Militar, otra la constituye la conformación de un bloque colonialista solidario con Gran Bretaña en la agresión militar a un país del tercer mundo. La primera, emparenta las acciones de resistencia de la clase trabajadora argentina al Proceso con las reivindicaciones del proletariado inglés contra el régimen conservador de la Thatcher. La segunda, la satisfacción manifestada por los patriotas irlandeses ante el hundimiento de la fragata británica Sheffield con la de todos los argentinos ante la recuperación del archipiélago.

Una vez más, la coincidencia de los intereses nacionales (derrotar al imperialismo) con los sociales (batir a las clases dominantes), exige un delicado equilibrio al procesar el análisis de la crisis.

Esquematizar, desequilibrar el peso de estos elementos, provoca errores de análisis que conducen a conclusiones ideológicamente extremas: la exaltación nacionalista burguesa y el clasismo descarnado de las particularidades nacionales con que se construirá la democracia revolucionaria. Si la primera es sospechosa de concomitancia con los opresores de la sociedad argentina, la segunda es peligrosa porque al universalizar el problema nos deja inermes frente al agresor extranjero.

El capitán Astiz, veterano ejecutor de la "guerra sucia", y sus compañeros de armas, nada tienen que ver con la aspiración de dignidad y justicia que subyace en la voluntad popular de recuperar las Malvinas para el patrimonio nacional. No hay distancia moral ni política entre el gobierno militar que sostiene campos de concentración como la Escuela de Mecánica de la Armada para poder subordinar a la clase obrera y entregar la soberanía nacional —actuando prácticamente como un "ejército de ocupación"— y el régimen imperialista británico que ha justificado ante el mundo la espantosa muerte de Bobby Sands y sus compañeros para continuar con la explotación y la opresión de Irlanda. Pero, además, la Nación argentina se enfrenta a una colusión de intereses imperiales que —aunque no es inédita— pone de manifiesto en la coyuntura la decisión irrestricta de atacar, en cualquier lugar del mundo, a quien los desafíe. Este hecho agrade la conciencia nacional argentina, y debe alertar al conjunto de los pueblos del mundo.

Se ha aplicado a Argentina el grueso del arsenal convencional de la OTAN, ampliando su radio de acción a todo el globo. No se emplearon armas atómicas, pero sí energía atómica y todas las técnicas de guerra concurrentes. La guerra que libra Argentina en defensa de su integridad territorial es singular. En ella está implícita su futura capacidad de decisión sobre el paso de Cabo de Hornos y el estrecho de Magallanes, la porción que le corresponde de la Antártida, la facultad de explotar y navegar sus aguas territoriales, la proyección sobre el conjunto del Atlántico Sur y la soberanía sobre los recursos minerales e ictícolas adyacentes al archipiélago, que son derechos de un pueblo latinoamericano. Y, solidariamente, las grandes naciones capitalistas enemigas de la Nación—, han sancionado a un país del tercer mundo, independientemente de la ideología de sus gobernantes, para consolidar una posición geopolíticamente estratégica y sustraerla de los riesgos de un cambio de régimen social.

No hubo en este caso confianza ideológica ni reconocimiento a los cruzados de la "civilización occidental y cristiana" que gobiernan nuestra Patria; advertencia que debe alcanzar a todos los dictadores y a los pueblos, que están solos en la defensa de sus intereses.

Sin embargo, no hay que olvidar que en la lucha social el enemigo de clase no titubeó en aliarse al enemigo de la Nación para destruir el espacio ganado por el pueblo. Ni reconoció servicios prestados a quienes le brindaron su respaldo en las horas difíciles. Ni que la Junta Militar y su elenco sólo intenta cambiar de ropaje: son los mismos actores de la guerra "antisubversiva", que ha provocado más bajas en el campo popular que la guerra de las Malvinas. Para ellos, que actúan bajo el principio de que sangre se lava con sangre, ni olvido ni perdón.

A partir de estas consideraciones, el análisis está destinado a arriesgar algunas hipótesis para responder a los siguientes interrogantes: ¿qué beneficio obtienen la clase trabajadora y el pueblo argentinos en este conflicto?; ¿qué nuevos elementos se incorporan al desarrollo de la lucha de clases en nuestro país; ¿con qué dirección trabajar en esta coyuntura para acumular fuerzas en el camino del poder?;

A ello contribuirá detectar las razones y objetivos que llevaron a la dictadura a dar este paso luctuoso, evaluar el desarrollo de los acontecimientos y determinar los probables cursos de acción futuros.

El desarrollo de la guerra en sí apenas puede ser modificado por la capacidad militar de Galtieri o quien le suceda. Sólo podría revertirse la desfavorable posición argentina con el involucramiento militar de la URSS y sus aliados, contingencia azarosa para el equilibrio mundial que no tomaremos en cuenta por carecer de elementos para su análisis.

Pero en el contexto general interno —si bien no cabe duda que será el pueblo quien cargará con el peso de la reconstrucción y el luto de la posguerra— la sociedad civil, las organizaciones populares, habrán ganado un espacio político no retornable frente a la dictadura.

Los militares argentinos, que hicieron uso de la iniciativa política con que cuentan desde 1976 —y aun antes—, se lanzaron a un complejo movimiento en la búsqueda del camino para la institucionalización del Proceso. Luego el desarrollo de los acontecimientos incorporó datos nuevos: por un lado, el debilitamiento en la instrumentación del programa económico y, por otro, la apertura del juego político a la presión social, que abre perspectivas a la organización de una oposición de mayor definición ideológica.

En el plano externo, lo que parecía un conflicto a solucionar en el corto plazo —dando cabida militar a EEUU en la zona e implantando un gobierno títere que profundizará la política económica y la intervención en Centroamérica— se ha transformado en un desencadenante de situaciones larvadas, cuyas consecuencias más notorias son la necesidad de un replanteamiento del sistema americano, la elevación del conflicto a nivel de confrontación Norte-Sur, el avance de la OTAN como instrumento militar estratégico del capitalismo, la definición antinorteamericana de toda Latinoamérica, la transformación del papel de gendarme centroamericano de las FFAA argentinas y el replanteamiento de su posición ante los países No Alineados, que se enfrentan a la exigencia de consolidar su condición de tales.

No agotado aún el conflicto, el panorama es dinámico y cambiante, lo que incorpora dificultades suplementarias al análisis. Estas deberán ser tomadas en cuenta por el lector cuando las confronte con las conclusiones empíricas derivadas del fin de la ronda de acciones iniciada el 2 de abril. Inscriptas en un análisis de la coyuntura, sin embargo creemos posible entresacar aportes para una línea de acción política que contribuya a la conformación de poder popular.

México, 20 de mayo de 1982.

1. Los objetivos globales del programa económico y su crisis

Los objetivos globales a largo plazo de la política económica implementada a partir de 1976, son incompatibles con formas democráticas de gobierno. Requiere métodos autoritarios que contemplen, como elementos esenciales, la desarticulación de las instancias de organización sindical y política de los trabajadores y la reducción o subordinación al bloque de poder del empresariado nacional. Recrear las condiciones para una acumulación de capital rentable exige la contracción de los salarios reales y la reversión de las políticas proteccionistas que sustentaron el proceso de sustitución de importaciones desarrollado durante las últimas décadas.

Resolver la cuestión de la hegemonía a favor del gran capital implicó el trasvasamiento del predominio económico a sectores cuya estrategia de largo plazo consiste en acelerar el crecimiento de la economía argentina a través de la racionalización del aparato productivo con base en las ventajas comparativas de nuestro país. La transferencia de ingresos y una política de promoción de sectores elegidos, fueron los instrumentos fundamentales.

Los pilares del nuevo modelo de acumulación, no obstante, aún no han alcanzado pleno desarrollo. Esta meta —como veremos— es uno de los alicientes del conflicto generado por el régimen. La entrega del subsuelo acompaña el objetivo futuro de petrodolarizar la economía nacional y, en este orden, la explotación de la cuenca Malvinas juega su papel en la crisis bélica iniciada el 2 de abril.

El caso argentino debe verse, en cuanto a la aplicación del modelo económico ultraliberal, como parte de un fenómeno de la economía mundial vigente: el de internacionalización del capital financiero, que rige el patrón de acumulación en toda América Latina y los espacios periféricos.

La integración productiva y de mercado de los países periféricos a la economía mundial, es parte de un vasto proceso de redistribución e internacionalización del ciclo de reproducción del capital internacional.

Argentina mantendría su integración al mercado mundial a través de la producción agropecuaria, aunque se propondría complementarla crecientemente con exportaciones industriales realizadas con recursos naturales (agropecuarios, petróleo, etc.). La estrategia contempla un grado de industrialización que implica la reformulación del aparato productivo nacional para competir internacionalmente. Las empresas transnacionales actúan, en este entorno, asociadas a las clases dominantes.

Transcurrido suficiente tiempo como para plantearse pasar a la etapa de crecimiento, con arreglo al modelo de acumulación buscado, debía iniciarse la etapa de consolidación, dando por concluida la política dirigida al exterminio de las bases materiales del "populismo". Pero a esta altura surgieron con fuerza inusitada las contradicciones dentro del bloque de poder —que se reflejaron en el interior de las FFAA. Con Viola, fracciones militares, intentaron recuperar la conducción del Proceso. El ministro Sigaut pretendió reactivar la economía para alcanzar la etapa de consenso político necesario para institucionalizarlo. Pero el Estado, reducido a mero ente de control, resultó inoperante para promover medidas que pusieran freno a la avanzada de las grandes empresas oligopólicas.

Todas las medidas correctoras adoptadas a partir del fracaso de Viola-Sigaut por el ministro Aleman condujeron hacia una situación social explosiva, que tuvo su pico en la movilización del 30 de abril.

Si en el año 1981 el PIB cayó un 6 por ciento (lo que determinó que el producto bruto por habitante resultara inferior al de 10 años atrás); la actividad industrial y la inversión sufrieron retrocesos del 16 y 21 por ciento respectivamente; la desocupación aumentó hacia fines de 1981 —según fuentes sindicales— a índices de entre un 20 y un 25 por ciento (1.500.000 personas) de la fuerza laboral; las quiebras del último quinquenio superaron en un 100 por ciento las del anterior; la deuda externa alcanzó los 34.000 millones de dólares; la tasa inflacionaria fue la más alta del mundo: 131 por ciento, la reimplantación de la ortodoxia monetarista que impulsaron Galtieri-Alemann, terminó de ahogar las esperanzas de un cambio en todas las clases sociales.

"Las estrategias a elegir no pueden basarse en una mayor recesión con las consecuentes secuelas económico-sociales, la exacerbación de la puja por la distribución de ingresos y la consiguiente realimentación de la inflación. . . en el marco de una economía de desempleo de la fuerza de trabajo y descapitalización del aparato productivo. . . Las actuales normas que rigen el funcionamiento del sistema financiero han casi destruido el aparato productivo. . . No se trata de hacer ajustes sino de rediseñar por completo lo que ha sido causa de inflación, de desaliento a la inversión y a la producción y vehículo de deterioro del patrimonio de las empresas", afirma el 12 de mayo la Unión

Industrial Argentina, una de las asociaciones de empresarios presuntamente beneficiarias del Proceso. Y agrega: "Esto vulnera precisamente un aspecto esencial de la economía capitalista: la ganancia es legítima. . ." Más allá de la disputa por la conducción económica, el sistema habría entrado en crisis, llegando al borde de la paralización del proceso económico. Y esto, a nuestro juicio, constituye una de las causas de la operación Malvinas.

a) Consecuencias de la política económica sobre las clases media y obrera

Los sectores más desposeídos fueron golpeados por el incremento notable de las quiebras comerciales, la reducción del nivel de actividad económica y la paralización industrial (que alcanzó cifras negativas del orden del 50,35 y 30 por ciento en textiles, automotriz y artículos para el hogar) y la caída vertical de los salarios reales. Mientras, la reducción de horas trabajadas en el sector manufacturero produjo un aumento en la tasa de desocupación que pasó a ser el doble de la registrada el año anterior. En consecuencia, el mediano y pequeño empresario ligado a la producción de bienes para el consumo de asalariados constituyó, después de éstos, la fracción más perjudicada, tanto por la disminución de la demanda como por la falta de apoyo estatal que pusiera freno a las empresas oligopólicas.

Esto llevó a la situación de que importantes fracciones de la sociedad argentina radicalizaran su enfrentamiento al Proceso ante el peligro cierto de su extinción. Ya no defendían solamente sus conquistas e intereses o una mayor participación en la distribución del ingreso. Frente al riesgo de su desaparición como clase o fracción de clase, luchan por su supervivencia; modificándose cualitativamente las características de la lucha de clase.

Los principales sectores afectados son: la clase obrera —que sufrió una reducción cuantitativa estimada en un 30 por ciento—; vastos núcleos urbanos de clase media —pauperizados por la pérdida del valor adquisitivo de su salario en un 40 por ciento— y el pequeño y mediano productor y empresario ligado al mercado interno.

En el sector agropecuario la expoliación alcanzó a los pequeños propietarios, a los titulares de formas de tenencia no propietarias y a los trabajadores agrícolas sin tierra. La mayor parte de las economías regionales, monopolizadas o no por las oligarquías del interior, se derrumbaron ante condiciones de intercambio internacional desfavorable y la penetración de artículos importados. Las principales víctimas de este proceso fueron los chacareros, los contratistas de viñas, los productores cañeros, las cooperativas vinculadas a la agroindustria y todos sus proveedores urbanos y rurales.

b) Contradicciones dentro del bloque de clases dominante

La creación de las bases de una nueva estructura económico-social donde los sectores privilegiados se inserten en las actividades que cuentan con mayor capacidad de absorción de excedente y acumulación de capital, generó —como complemento a la gravedad de la coyuntura— consecuencias sobre algunos sectores beneficiarios estratégicos del proyecto, que se vieron afectados por la crisis de reestructuración. Ello dio lugar a contradicciones suplementarias entre los grandes capitales industriales entre sí y entre éstos y los del sector agropecuario, que afectaban la estabilidad del Proceso frente a la creciente ofensiva popular.

c) El resquebrajamiento del poder militar

La virtual paralización del proceso económico, la radicalización del enfrentamiento de las clases populares, las contradicciones internas del bloque de clases dominante y la evidente falta de respuestas económicas a la crisis, condujeron a un aislamiento casi total de la Junta Militar y el equipo económico. Como consecuencia política se evidenció un profundo repudio de toda la sociedad a las FFAA. El afianzamiento del Proceso sobre bases consensuales era imposible a todas luces. La "apertura política" corría el riesgo de descontrolarse de la tutela militar. El desemboque del proceso en un callejón sin salida, el desaliento, la corrupción, aceleraron las fisuras en el seno de las FFAA. Galtieri sólo contaba con la compañía de su desprestigiado equipo económico. Las líneas internas del Ejército desenvainaban los sables para una nueva aventura golpista.

Sin embargo, aún ante la evidencia de los síntomas de descomposición del Proceso, el equipo económico insistió en sus recetas.

2. El estallido popular del 30 de marzo

a) Sus prolegómenos

Las manifestaciones opositoras se multiplicaban por todo el país. Los actos organizados por la Multipartidaria y la actividad de las CGT de las regionales del interior y de Buenos Aires, alentaban la generalización de conflictos laborales y gremiales. Las organizaciones empresarias se sumaron al coro unánime de la crítica. Las Madres de Plaza de Mayo empezaron a no estar tan solas.

La CGT nacional el 19 de marzo convocó a un Plan de Movilización que, fue recibido por las clases populares como un grito de batalla. Bajo la consigna "La Patria convoca al Pueblo", estaba destinado a "expresar el rechazo del pueblo al gobierno militar".

Ese mismo día la Ford de General Pacheco despidió a 3.000 operarios; el ex gobernador de Córdoba, gral. Adolfo Sigwald, fue detenido en averiguación de fraudes en la provincia. El 21 los diarios titulaban: "Se prepara un documento sobre los desaparecidos". El 22 la Junta Militar, junto a los generales en actividad, trató el tema de las denuncias sobre corrupción en la administración pública en las que se hallan implicados numerosos oficiales de las tres armas. FIEL anuncia que el PIB cayó un 20 por ciento en el último trimestre de 1981. El 23 de marzo la Unión Industrial Argentina declara que "no se vislumbran signos de reactivación..."; la Renault, en Córdoba, suspende a 4.000 obreros mecánicos; Confederaciones Rurales Argentinas afirma: "El gobierno parece solazarse con la quiebra de la soberanía nacional que es su producción. No podemos ser testigos silenciosos de la desintegración de la Nación"; el Foro de la Empresa Nacional denuncia que "la producción industrial se ubica en niveles inferiores a los de 1980, en el primer trimestre de 1982... Y el salario real ha vuelto a experimentar una caída del 15 por ciento..."

El mismo día (23 de marzo) en que la Armada Nacional decidió apoyar a la dotación instalada en las Georgias, la Secretaría de Industria anunció un proyecto de privatización total de 14 empresas siderúrgicas, químicas y petroquímicas con participación accionaria de Fabricaciones Militares, la renegociación de los contratos petroleros revisando las cláusulas de riesgo para favorecer el desempeño de las empresas privadas y transnacionales y la finalización del dictamen de la comisión que, en ámbitos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, estudia la posibilidad de privatizar el subsuelo. El propio Galtieri el 27 de marzo, reafirma y asume la política implementada por el equipo económico, aceptando su "dureza". Cobraban realidad, pese a la crisis social desatada, los anuncios de Alemann un mes atrás cuando afirmó que "la reanimación de la actividad no será por vía del consumo...", cerrando toda perspectiva de cambio de política que hiciera posible descomprimir la protesta generalizada.

El 27, SEVEC Argentina, fábrica de automotores Fiat y Peugeot en Berazategui, anuncia el cierre de sus actividades y despido del personal.

El 28 de marzo el Ejército dispuso posponer el licenciamiento de la clase 62 para garantizar el orden público ante la anunciada convocatoria de la CGT a Plaza de Mayo y a las cabeceras de gobierno de las principales provincias.

Con motivo de la ocupación de las Georgias se pone en marcha el intento militar de confundir la defensa de la soberanía con los intereses del Proceso. Los dirigentes de la CGT que han convocado a la movilización del 30 de marzo responden con decisión a las amenazas. El 29, Pérez, Secretario de Prensa de la organización dijo: "Para los trabajadores la prioridad es el problema interno y, especialmente, la situación económica..." y consideró que el incidente diplomático con Gran Bretaña "no es un factor decisivo que pueda afectar la soberanía". José Rodríguez advirtió sobre la responsabilidad de que "se utilicen los sentimientos patrióticos del pueblo para 'parar' la protesta social en ciernes". Ubaldini declara: "Primero está la Patria, aun cuando no estemos de acuerdo con el gobierno de turno; no obstante nosotros queremos que se solucionen los gravísimos problemas socioeconómicos que padecen los trabajadores".

b) Sus consecuencias

Los observadores y dirigentes políticos de todas las tendencias coinciden en afirmar que la marcha por la Paz, el Pan y el Trabajo convocada por la CGT activó fuerzas dispuestas a conducir al Proceso hacia su defunción. Saadi afirmó en México: "El pueblo ha recuperado la soberanía popular; el miedo quedó atrás". Un comentario gremial de Clarín del jueves 10 de abril afirma que "lo menos que se insinúa es el punto de partida de una nueva relación entre el poder y los sectores intermedios". La propia CNT-20 reconoció que "los trabajadores han agotado su paciencia frente a los graves y angustiosos problemas que a diario deben afrontar"... "Es preciso que el gobierno advierta que manifestaciones como las que se están produciendo a diario en todo el país, y particularmente lo acontecido el día de ayer (con el martes 30), obliga a que se reflexione sobre nuestra realidad en forma urgente".

El comunicado de la CGT del día 31 emplea un idioma inimaginable días antes: "La ciudadanía unida brindó el inicio de acciones mayores que nos llevará a todos a derrotar a este Proceso... La CGT felicita al pueblo argentino por este acto de patriotismo... Lo que no pudo lograr ningún ejército extranjero en 172 años de vida independiente lo consiguió un grupo de aventureros económicos en sólo 6 años de Proceso".

El estallido popular del 30 de marzo, alertó el régimen sobre el riesgo en que estaba incurriendo.

Los militares respondieron con la represión: más de 2.000 detenidos en Capital Federal, en Mendoza seis heridos de bala y un muerto, en varias capitales del interior los enfrentamientos entre efectivos de seguridad y manifestantes adquirieron suma violencia. Casi toda la dirección de la CGT fue detenida. El ministro del Interior, el 2 de abril, descalificó a la "autodenominada CGT" y afirmó: "La movilización fue una intención de gimnasia, no voy a decir te-

rrorista, pero no anda muy lejos de subversión". Añadió: "El proceso necesita consenso, pero también desarrollar una política económica dura".

Los partidos políticos adolecen de un gran deterioro de representatividad y liderazgo, y la Multipartidaria no trasciende el marco de negociación impuesto por la dictadura. La CGT, aunque conflictuada por disidencias internas y limitada en su autonomía por su ilegalidad, debió ocupar el vacío de expresión política de los trabajadores y se puso a la cabeza del enfrentamiento.

No obstante, el malestar social derivado de la aplicación a rajatabla del plan económico no se sustenta en un claro proyecto opositor alternativo al de las clases dominantes.

Todo esto juega objetivamente a favor de la dictadura, dándole margen de maniobra. Sin embargo, al 2 de abril, ese margen no alcanzaba para contrarrestar la presencia cada vez más consistente y decidida de la movilización popular y la oposición de todos los sectores de la sociedad argentina.

En este marco interno es donde debe ubicarse el lanzamiento del "operativo Malvinas".

3. Los objetivos buscados con la toma de las islas Malvinas

Con las políticas descritas, evidentemente, era imposible revertir —ni siquiera atenuar— la coyuntura económica y, por consecuencia, detener el avance de los trabajadores y la oposición y su reorganización política.

Para lograrlo, se intentó una maniobra integral que incluye objetivos estratégicos económicos y políticos

La respuesta no debía entrar en colisión con los planes del Pentágono ni con las necesidades del capital.

La estrategia de los generales consistió en provocar —planteando un objetivo de interés nacional— la galvanización de la sociedad alrededor de las Fuerzas Armadas.

a) Objetivos estratégicos

Puede aventurarse que la toma de las Malvinas fue una acción planeada, prin-

cial pero no privativamente, en los Estados Mayores militares, con la aquiescencia de otras fracciones de las clases dominantes (el Ministro de Economía, sus colaboradores, el establishment) y algunos sectores de poder de Estados Unidos.

Las FFAA comprometen en la maniobra la totalidad de sus recursos, jugando en una operación —sí que compleja— su supervivencia no sólo como gobierno sino como institución. En este sentido se asemeja a la que supuso el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Y, como aquella, está inscrita en una doctrina que es producto de su particular lectura ideológica de la realidad argentina y mundial. Encuentra, incluso, antecedentes históricos para su fundamentación. Aunque las circunstancias y los actores son diferentes, puede suponerse que se tomaron en cuenta — a modo de antecedente, no de comparación— los pilares que fundamentaron la victoria estratégica obtenida por la generación del 80: *el aniquilamiento del enemigo interno (las montoneras gauchas); *la reestructuración del esquema productivo nacional de acuerdo al modelo hegemónico a nivel mundial (el imperio británico) y *la expansión territorial de la Nación (la Campaña al Desierto).

El hecho bélico de la toma de las Malvinas tiene como objetivo alinear a todas las fuerzas políticas y sociales tras la institución militar. De acuerdo a ese objetivo, las FFAA se mimetizan en el Estado, y la sociedad —por encima de los intereses de clase— debe aceptar la conducción del régimen que se erige como su representante. *Es un intento de confundir los intereses del régimen con los de la Nación*, bajo el pretexto de acumular fuerzas para una guerra anticolonial.

Al mismo tiempo, la necesidad de la institución militar de recuperar la condición de *nacional*, se resuelve a través de generar un conflicto externo. El *principio de necesidad* que lo guía tiene su origen en el objetivo permanente de transformar a la institución armada (de ejército opresor en ejército liberador).

Con un acto, las FFAA pretenden borrar siglo y medio de historia de gendarme interno y recuperar la imagen de ejército sanmartiniano. Las FFAA —que sólo han obtenido victorias contra la “subversión”— frente a la crisis estructural del sistema, para defenderlo, se elevan con este acto a la condición de portadoras del destino de la Nación.

Esfumada la impracticable posibilidad de un consenso para la “apertura política”, la cúpula militar planea imponer un consenso obligado a la continuidad de su proyecto. La *movilización despolitizada* que promovió como respaldo a la recuperación de las Malvinas tiene por objeto subordinar la cuestión social, acallar la protesta, postergar los reclamos. Alinear a la socie-

dad tras la bandera celeste y blanca —repitiendo la experiencia del Campeonato Mundial de Fútbol— facilita la confusión entre los objetivos nacionales y los del régimen. Y la conducción de ambos —las FFAA— lograría una adhesión coyuntural que le daría el tiempo necesario para resolver la implementación de los objetivos finales del Proceso.

En la confrontación Este-Oeste, Argentina tenía posición tomada: “pertenece por raza, religión y tradición al bloque occidental”, de acuerdo a la doctrina de las fronteras ideológicas que suscriben los altos mandos. Pero la afirmación de su presencia en el archipiélago fortalecía su capacidad de negociación con EEUU. La estrategia pentagonista necesita de una base en el Atlántico sur para prevenir —dada la crítica situación política centroamericana— una clausura del Canal de Panamá. Montada en tal supuesto, Argentina compartiría la vigilancia del Cabo de Hornos y el paso de Magallanes y, por añadidura, extendería su influencia al de Buena Esperanza. El ingreso de Argentina al acuerdo de las grandes potencias navales a cargo de la seguridad mundial en la región, zanjaba de un golpe la competencia con Chile y Brasil. Y garantizaba, ante la vecindad del vencimiento del período de veto en la explotación del territorio antártico (1991), su proyección hacia el mismo.

b) Objetivos económicos

El régimen requiere aún de la “tregua social” que, si no puede imponer por la violencia, debe obtener por alguna forma de consenso. Los próximos años son imprescindibles para sentar las bases jurídicas y políticas de la explotación del subsuelo y de la actividad de las empresas concentradas. En ese lapso, Argentina, bajo el control del capital financiero nacional e internacional, puede convertirse en exportador de energía, minerales estratégicos, química y petroquímica y de alimentos elaborados. Resuelta la coyuntura, estos excedentes abren el camino a un nuevo patrón de acumulación que hará posible una transformación de la sociedad argentina de acuerdo al modelo de distribución consecuente. La crisis social pasará así a la historia, enterrándose la larga etapa de hegemonías no resueltas que se viene desarrollando desde 1952.

Argentina conseguiría así ser un gran exportador de alimentos y de energía simultáneamente, rango singular que la diferenciaría de cualquier otro país del Tercer Mundo.

La capacidad de Argentina como país exportador de petróleo radica en la enorme extensión de su plataforma submarina, donde actualmente se explotan varios yacimientos. Pero en sus cuencas australes (un millón de kilómetros cuadrados), las exploraciones geofísicas han detectado fuentes potenciales que constituyen una importante reserva para el futuro.

Para promover su explotación —y alcanzar el objetivo de convertir a Argentina en país exportador hacia 1984— los planes de Martínez de Hoz —contingidos por Sigaut y Alemann— instrumentaron el desmantelamiento de la capacidad productiva del Estado, subordinando a Yacimientos Petrolíferos Fiscales y otorgando ventajas a las transnacionales: la empresa estatal realiza las inversiones en infraestructura y explotación más costosas y la información es puesta a disposición de las compañías privadas. Estas obtienen las ganancias y YPF absorbe los déficits.

La entrega de los recursos del subsuelo a las grandes empresas se lleva a cabo a través de la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Contratos de Riesgo, calificadas por una consultora inglesa como "Las más liberales de Latinoamérica". Estos abogados de las transnacionales dictaminan: "La mayor actividad en el sector petrolero está en la actualidad en el Atlántico sur, fuera de las costas, donde las perspectivas de las compañías extranjeras son considerables. . ."

Los contratos firmados bajo la Ley de Riesgo establecen plazos de siete años para la exploración del mar que, en caso de dar como resultado posibilidades de explotación comercial, se extienden a 25.

Pero las reservas potenciales mencionadas se hallan en regiones conflictivas, donde Argentina tiene problemas de soberanía territorial: las islas Malvinas y el Canal de Beagle.

Las transnacionales petroleras no podían menos que atender a este caso. Agotadas las reservas de los grandes productores actuales (particularmente Medio Oriente), la explotación se orientará hacia las cuencas submarinas. Nuevas potencias petroleras reemplazarán a las actuales y las transnacionales pondrán a su servicio la costosa tecnología moderna. La reducción de las reservas continentales explotadas con técnicas tradicionales las indujo hace algunos años a buscar fuentes alternativas. Las torres de la British Petroleum comenzaron a emerger de las aguas del Mar del Norte y la tecnología de la extracción submarina a difundirse. Las plataformas flotantes que se construyen para operar en el Mar del Norte son directamente aplicables a la cuenca austral. La Shell (beneficiada por uno de los contratos adjudicados en la zona de Río Gallegos) tiene en viaje a dos de ellas: la Interocean II y The Epoch.

Con la puesta en marcha de sus yacimientos en el mar epicontinental y las cuencas australes, Argentina puede convertirse en pocos años en el exportador petrolero más estrechamente ligado a occidente, abriendo una alternativa de abastecimiento a las grandes potencias que hoy lidian con la OPEP.

Pero la magnitud de los recursos naturales subyacentes en el mar que rodea a las Malvinas no se agota en los energéticos.

Los llamados "nódulos polivalentes", asentados en el fondo del mar antártico, conforman la alternativa técnica más aceptable hasta hoy para reemplazar los yacimientos de hierro y manganeso cuya explotación se va haciendo cada día más costosa. Y el "krill" —una especie de crustáceo que se desarrolla en las aguas heladas— constituye una abundante fuente de proteínas para el futuro.

Recuperar algún grado de decisión sobre estos inmensos recursos forma parte de los fundamentos de la acción militar emprendida el 2 de abril. Las compañías, para realizar sus enormes inversiones, requieren de un status jurídico estable. El control británico tenía un futuro imprevisible.

c) Objetivos políticos

De acuerdo a las condiciones estratégicas enunciadas, la salida a la crisis social y económica vigentes se convierte en una suerte de "huida hacia adelante", bajo la concepción de que "lo pasado pisado". El prestigio del nuevo ejército —cuyos generales ahora sí "han escuchado silbar una bala"— abre las perspectivas de la institucionalización del Proceso sobre nuevas bases. Ganada o perdida la guerra, ¿quién puede cuestionar el puesto de honor en la mesa de negociaciones políticas a los representantes de la institución militar?

Esas Fuerzas Armadas, fortalecidas en la guerra contra el enemigo extranjero, elevado su nivel de cohesión interna, se hallarán en excelentes condiciones, además, para alcanzar un objetivo secundario: ganar espacio en las contradicciones internas del bloque de poder. En la reconstitución de esa alianza el ejército de posguerra de seis años y revalorizando su decisivo aporte al Proceso: la victoria contra el enemigo interno, que cada día incide menos en la mesa de negociaciones con el gran capital.

En el frente político y social, esos oficiales que por segunda vez han arriesgado su vida en defensa de la Patria podrán elegir a sus aliados y condenar a sus enemigos, y disponer —generosamente— con quienes compartir la construcción de una democracia "estable y moderna" bajo su indiscutible tutela.

En la clarificación de los objetivos políticos perseguidos por las FFAA cuando decidieron ocupar las Malvinas hay pocos testimonios tan explícitos como las declaraciones del Subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior, coronel Bernardo José Menéndez. Este oficial es considerado uno de los más inteligentes funcionarios políticos del régimen. A su cargo se hallan las relaciones políticas más delicadas que debe encarar el ministro Saint Jean. Es el más joven de la generación de su apellido; el general Benjamín Menéndez fue autor de un audaz golpe antiperonista en 1952; Luciano Benjamín el feroz represor que comandó el III Cuerpo de Ejército con sede en

Córdoba a partir del golpe de Estado de 1976 y Mario Benjamín, el actual gobernador de las Islas Malvinas.

"Ha habido liderazgos que han concitado apoyos masivos, pero siempre esos apoyos tuvieron posiciones vigorosas. En tanto que la recuperación de las Malvinas marca un hito definitivo, en el que coincidimos todos con una determinada política y nos proponemos marchar juntos. Esto, es una situación absolutamente inédita. Si nosotros somos capaces de vertebrar un sistema político que asegure la continuidad después de las frustraciones que los argentinos hemos tenido a lo largo del siglo XX... significa el cierre de un capítulo..."

"Cuando en 1958 se produce en Francia el movimiento de Argel que llevó al poder al general De Gaulle y se inició la Quinta República, significó automáticamente que la anterior quedaba clausurada. Francia comenzó a vivir una nueva época..."

"Nosotros estamos convencidos que estamos ante ese cambio y que es la gran oportunidad que se nos ofrece a los argentinos de 1982. La historia no golpea las puertas del pueblo todos los años, y esta vez ha golpeado... El gobierno va a tener que instrumentar una participación importante de (todos) los sectores... ahora nos encontramos abocados a la formulación de un plan político". Y añadió: "El gobierno se encuentra ante dos desafíos: uno, la consolidación en el orden político y en el militar de lo hecho el 2 de abril. El segundo desafío es la explotación de las condiciones políticas que se nos han presentado".

4. La instrumentación política de la maniobra

Los múltiples actores entremezclados y contrapuestos que convergen en la operación impiden —por ahora— realizar un análisis preciso de los episodios previos a la ocupación de las Malvinas. Como se ha visto, los intereses en juego son de enorme importancia, tanto para el país como para las grandes potencias y las corporaciones involucradas en negocios vinculados al Atlántico Sur. Ninguno de ellos tiene, asimismo, una conducta lineal y los límites de su acción son difíciles de precisar. Y, en el juego de presiones y contrapresiones, las distintas vertientes de poder se van reacomodando y cambiando de alianzas. Es difícil determinar si la maniobra, a esta altura, era conducida por Galtieri o Reagan, por la Thatcher o las transnacionales, por las FFAA argentinas o el Pentágono, si las conductas personales eran coherentes con las institucionales.

Pero, siguiendo la línea de los intereses es posible diseñar algunas hipótesis coherentes con las conclusiones alcanzadas en páginas anteriores. Estas son útiles para caracterizar el proceso, pero la dialéctica posterior de los hechos —a nuestro entender— dio por tierra con todas las previsiones y proyectos de las diferentes partes afectadas.

Es obvio que —en principio— ninguno de los impulsores del operativo Malvinas aspiraba a generar un conflicto de la globalidad que ha alcanzado. La primera conclusión, entonces, es que se trataba de sacar el mayor provecho de un conflicto limitado.

La dictadura no pretendía retirarse, sino transformarse, y los EEUU buscaban solidificar la posición de su aliado latinoamericano sin entrar en contradicción con su asociado en Europa y la OTAN. Las transnacionales, independientemente de quién fuera el ganador de esta puja, sólo aspiraban a obtener garantías para sus inversiones a largo plazo y sacar de ellas el mayor rédito.

Está claro, también, que a ninguno de ellos le importaba demasiado el costo al que defendieran sus intereses.

A la Junta Militar, —siendo la que más tenía para perder— entre reiniciar la represión interna con su saldo de muertos, torturados y desaparecidos y entregar la vida de unos millares de jóvenes en un frente de batalla anticolonialista, no le cabía opción. Y los EEUU, siendo que ese precio lo pagaría al fin el pueblo argentino, tenía todo para ganar: un cancerbero de sus intereses en Centroamérica, la administración tripartita del archipiélago (con sus consiguientes ventajas en su política de seguridad mundial), la explotación petrolera para sus empresas y la proyección sobre la Antártida. Inglaterra resolvía una causa pendiente, sin perder la presencia (en todo caso no más que en la peripecia de la isla Diego García, en el Indico, traspasada a EEUU en el mayor secreto y sin tomar en cuenta la "autodeterminación" de sus habitantes, que fueron desalojados por cuenta de los marines yanquis) y abriendo la perspectiva de una negociación a largo plazo que diera estabilidad a las inversiones de las empresas petroleras.

A la ocupación por parte de las FFAA argentinas del archipiélago debía seguir la instalación de un gobierno títere de los EEUU en Argentina. Este debía cumplir el rol de implantar una democracia "moderna y estable" bajo control militar y continuar con el cumplimiento de los objetivos de largo plazo del Proceso. Complementariamente, lograría el suficiente espacio para reprimir a los sectores sociales más remisos, repartiendo el poder político con toda aquella expresión de la sociedad que no tuviera un cuestionamiento de fondo al proyecto transnacional y tendiendo un manto de olvido sobre los crímenes cometidos durante la guerra antisubversiva. Su imagen internacional,

por otra parte, le permitiría recurrir a la banca mundial controlada por el imperialismo para refinanciar la deuda externa e interna del país y reacomodar la alicaída diplomacia internacional deteriorada por la gestión de la dictadura. Era la culminación ideal de la etapa iniciada el 24 de marzo de 1976. Su programa trascendió a través del editorial de La Nación donde se difundió un Plan de siete puntos y otras publicaciones y rumores. Implicaba: el dictado de un estatuto de los partidos políticos condicionado a la adhesión y apoyo a la reivindicación de la recuperación de las Malvinas y a la no renovación de sus dirigentes; la no revisión de ninguna de las acciones desarrolladas por la Junta Militar desde el golpe de Estado; una apertura política amplia que incorporara el más amplio espectro posible a la "salida democrática" y permitiera aislar a la oposición real; una amnistía que alcanzara a militantes populares (salvo que tuvieran pendientes delitos de sangre) y torturadores (una especie de blanqueamiento mutuo de los contendientes de la guerra interna); y el derecho de las autoridades militares a mantener encarcelados a aquellos reos considerados "de máxima peligrosidad" para la continuidad del Proceso. En esos días trascendió, asimismo, que el número de estos alcanzaría a un centenar, que se daría satisfacción —individual, no públicamente— a los familiares de 5.000 desaparecidos, que serían levantadas las sanciones impuestas por las Actas de Responsabilidad Institucional que afectan a algunos miembros del último gobierno peronista y que se dictaría una amnistía específica para los exiliados políticos.

Allanados estos obstáculos era posible una retirada ordenada y honrosa de los militares hasta que volviera a ser necesaria su actuación.

El tema de la corrupción administrativa no sería investigado, no habría causa contra los traidores que entregaron el patrimonio nacional, el peronismo sería domesticado hasta el punto de que aquellos dispuestos a deponer las armas serían bienvenidos, las corrientes combativas vigentes en el interior de los partidos quedarían taponadas por el reconocimiento de la gerentocracia que ocupa los cargos de conducción, el retorno del exilio conllevaría a una descalificación de la denuncia y la solidaridad que practicarán los que no se plegaran a la defensa de la Patria agredida, se liberaría a los presos políticos que la Junta determinara, la aclaración del tema de los desaparecidos quedaría a disposición de la buena voluntad de los criminales, los militares que actuaron ilegalmente en la lucha antiterrorista serían absueltos de todo delito mediante la amnistía y, lo que es fundamental para un repliegue ordenado de las FFAA, el olvido para los delitos contra la humanidad debía sellar el pacto. Sobre el movimiento obrero organizado, sin embargo, nada se dijo. Para resolver este tema siempre hay traidores dispuestos a constituir una CGT ilegítima; para los demás, el silencio a la represión.

a) Algunos datos sobre la trascendencia de la maniobra

Aunque las consecuencias no buscadas de la ocupación militar de las Malvinas

parecieran desmentirla, la evidencia del sentido común permite afirmar que ciertos responsables de la política exterior norteamericana se hallaban si no implicados, por lo menos al tanto de la acción que desplegarían los militares argentinos. Ello fortalecerá la hipótesis antes dicha.

Un recuento cronológico exhaustivo de pronunciamientos, comentarios y análisis sobre el tema, escapa a este trabajo. Sin embargo, vale la pena citar algunos.

El día 23 de noviembre de 1981, La Nación recoge un comentario del contralmirante Milia según el cual "Washington considera la posibilidad de arrendar las tres principales islas del Beagle por 99 años para instalar en ellas una base militar (...). A cambio, los EEUU mediarían firmemente en favor de la devolución de las Malvinas en un tiempo razonable. ..."

El 17 de enero, en La Prensa, J. Iglesias Rouco (vocero de la marina habitualmente bien informado) comenta que, para EEUU, Beagle y Malvinas es un solo problema desde el punto de vista de la defensa del Atlántico Sur, razón por la que se estaría manejando la posibilidad de "que la Argentina se apodere de las Malvinas (...) el diferendo austral (Beagle) se situaría bajo otra luz. ..." y la OTAS quedaría a un paso. "Por lo demás, el proyecto económico y político del régimen obtendría un punto de sustentación (...) cierto campo de maniobra, hoy casi nulo"

Clarín del 2 de marzo da cuenta de un anuncio del Palacio San Martín según el cual el 26 y 27 de febrero, en Nueva York, representantes de Argentina y Gran Bretaña, celebraron una reunión en que se dejó establecido un nuevo mecanismo para negociación sobre Malvinas, Georgias y Sandwich; pero si el mismo no resultare eficaz "la Argentina mantiene el derecho... de elegir libremente el procedimiento que mejor consulta a sus intereses".

El 3 de marzo, Iglesias Rouco en La Prensa y ante la visita del general John Mc. Emery, presidente de la Junta Interamericana de Defensa, señalaba que Argentina estaba "considerando seriamente la posibilidad de una ruptura con Gran Bretaña... que incluiría la ocupación militar de las islas...". "...el gobierno norteamericano habría expresado ya su comprensión" en el entendimiento de que la recuperación de las islas constituye "condición *sine qua non* para el establecimiento de una adecuada estructura defensiva occidental en el Atlántico Sur..." con la posibilidad de instalar bases conjuntas. Los militares argentinos confiaban en su "hermano mayor" del continente.

Un destacado político argentino relató que Nicanor Costa Méndez evaluó frente a la Junta Militar que la votación en el Consejo de Seguridad estaba ganada, en caso de ocupación militar de las Malvinas (sólo manifestó dudas so-

bre el pronunciamiento de Panamá, a la sazón el único que después votó a favor).

Durante el mes de marzo Galtieri y Costa Méndez sostuvieron numerosas entrevistas con el embajador norteamericano en Buenos Aires, Harry Schlaudeman, evidentemente al tanto de los propósitos militares argentinos. La aceptación de la mediación norteamericana, sin vacilaciones por parte del gobierno argentino, parecía estar encaminada a la constitución de un régimen de administración tripartito en las Islas que convenía a EEUU, y por el que Haig realizó notables esfuerzos. Pero, además, el 5 de mayo en las Naciones Unidas, el embajador argentino Eduardo A. Roca, (abogado de la Coca Cola en Buenos Aires) prácticamente confirma la existencia de un acuerdo previo entre su país y la administración Reagan: "Estados Unidos dio al Reino Unido el tiempo necesario para que la flota punitiva llegara a su destino, dejando de lado sus propias promesas de imparcialidad. . . Washington no dijo la verdad: confundió a su propia opinión pública y ahora ayuda al colonialismo agresor".

Es evidente que el gobierno militar argentino esperaba o había pactado la abstención norteamericana en el conflicto.

Por otra parte, la información disponible revela que Gran Bretaña estaba también en antecedentes del hecho. El 26 de marzo de 1982, el Intelligence Service comunicó al Foreign Office la decisión argentina de invadir las islas y entregó informes sobre los preparativos. Las advertencias llegaron también por vía del periodismo, que recogió los comentarios y declaraciones de la prensa porteña. Entre las causas del relevo de Lord Carrington se mencionó el no haber prestado la debida atención a tales informes de sus servicios aunque es sabido que éste, por haber firmado en nombre de la Gran Bretaña el protocolo de las Naciones Unidas donde la potencia asumía el compromiso de descolonizar el archipiélago, se hallaba impugnado para avalar las operaciones militares que el gobierno de Miss. Thatcher ordenaría.

The Times publica, en su edición del 27 de marzo: "Este episodio —la ocupación de las Georgias— no es ciertamente el fin de la historia; Buenos Aires tiene efectivamente capacidad para hacer mucho más que enviar un grupo para izar su bandera en tan remotas islas".

El 29 de marzo, en Londres, la BBC afirma: "La presencia de naves de guerra argentinas en la zona de las Malvinas demuestra que los propósitos van mucho más allá de un contrato de arrendamiento".

El 1o. de abril, el diario de mayor tirada en Inglaterra, The Sun, informa: "Marchan a la batalla naves de guerra en ruta hacia la confrontación en el Atlántico".

En Buenos Aires los hechos se precipitan. Harry Schlaudeman se reúne con Costa Méndez y Galtieri los días 30, 31 y 1o. El Jefe de Operaciones de la armada de EEUU, Thomas Hayward declara que su país "es completamente neutral en el entredicho con Gran Bretaña". Se reunirá con los tres comandantes y el Ministro de Defensa: "EEUU está interesado en mantener la libertad de navegación en el Atlántico sur". El 2 trasciende un comentario: "Schlaudeman se mostró interesado en la posibilidad de ejercer una gestión de buenos oficios, favorecida por el secular entendimiento anglonorteamericano. . . Se le habría solicitado un esfuerzo en favor de nuestro país, teniendo en cuenta el espíritu de colaboración que se ha demostrado hacia EEUU en el ámbito centroamericano. . ." (Clarín). Dean Fisher —portavoz del Departamento de Estado— "confirmó que Schlaudeman sostuvo varias reuniones con las autoridades argentinas. . . donde planteó los deseos de Washington de actuar en la condición de amigo de ambos países" (UPI AP). El cable añade: "Se considera inevitable una intervención de los Estados Unidos para impedir que la disputa entre en un clima de *casus belis* (dada) la tradicional actitud de EEUU, desconfianza a toda intervención europea en el continente, porque las Malvinas y las Georgias están comprendidas en el marco geográfico del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Doctrina Monroe todavía está vigente. . . Washington puede llegar a tomar posiciones enérgicas, como en 1956, cuando Gran Bretaña y Francia (y luego Israel) quisieron impedir que Gamal Abdel Nasser nacionalizase el canal de Suez. En aquella ocasión la 'relación especial' que distingue a Washington y Londres no tuvo efecto positivo para los ingleses, que debieron ceder ante Egipto".

b) Orfila: figura de recambio

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos es uno de los candidatos más firmes a cumplir el rol asignado en la maniobra al gobierno títere de Argentina. Pero no el único. Para llevar a cabo la faena de un gobierno "de transición", "de emergencia", o recambio de la Junta Militar, sea cívico o cívico-militar, abundan los candidatos y proyectos. Pero sobre Orfila existen datos que permiten ejemplificar.

En noviembre de 1981, un grupo de gremialistas y políticos realiza en Washington una gestión para invitar a visitar el país y ejecutar una acción en torno a la "unidad nacional" a Alejandro Orfila. Sucesivas actividades posteriores —a las que no son ajenas fracciones opositoras a la política de Reagan en el Congreso de Representantes— dan como resultado el viaje de éste a la Argentina.

El Secretario General de la OEA declaró el 7 de marzo en Mendoza su provincia natal: "La bandera argentina flameará pronto en las Malvinas. . . Son argentinas y estoy seguro que el Gobierno argentino, con la mejor de las polí-

ticas, va a hacer flamear el pabellón nacional lo antes posible en las Malvinas" (La Razón).

En el agasajo que le preparó Ricardo Yofre (ex Subsecretario de la Presidencia de Videla) días después (12/3) estuvieron presentes Rafael Martínez Reymonda, Deolindo Bittel, Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio, Walter Constanza, Francisco Cerro, Carlos Contin, Eduardo Angeloz y Emilio Hardoy (La Nación). El anfitrión, comentando la cena (Clarín 13/3), dijo: Hubo acuerdo de los partidos políticos "en los principios básicos de lo que debe ser la política exterior de Argentina", pero "hubo un denominador común de la política interna que fue realmente excepcional, porque todos coincidieron en que de esta crisis política que está viviendo el país no se sale sin un acuerdo". Añadió: "Hubo acuerdo de los partidos políticos de ir concertando actitudes y posiciones para luego converger en un gran acuerdo con las fuerzas armadas para construir una democracia estable y moderna".

El perfil de pieza de recambio que adquiere Orfila se pone de manifiesto, además, en su intensa actividad de esos días: entrevistas con el ministro Costa Méndez y Comandante de la Fuerza Aérea y Lami Dozo, primero y con Galtieri y el Nuncio Apostólico, (Mons. Calabresi, al día siguiente (11 y 12/3). El 14/3 cenó en casa de Antonio Cafiero, junto a Bittel, Lorenzo Miguel y Roberto García.

c) El papel asignado a los partidos políticos

El consenso superestructural previo a la apertura del camino a un "gran acuerdo", implicaba necesariamente a las fuerzas políticas y sociales. Pero no todas respondieron sin reticencias. La CGT, a pesar de sus contradicciones internas, no dejó de emitir declaraciones y preparar la movilización del 30 de marzo, aunque otorgó cierta consideración a la cuestión de la soberanía nacional.

A los dirigentes de los principales partidos de la Multipartidaria, explícita o implícitamente, se les reclamaba apoyo para los sucesivos pasos políticos y militares.

Repentinamente fue abandonado el proyecto militar de instrumentar una fuerza política que diera continuidad institucional al Proceso. La FUFEP (Fuerza Federalista Popular) debía reemplazar al "partido militar" en el gobierno, construyendo el partido conservador inexistente con dirigentes "naturales" del interior del país y hombres del establishment.

Las numerosas entrevistas mantenidas por el Ministro del Interior con toda la constelación de políticos de la Multipartidaria y otras fuerzas menores, dieron como resultado que los dirigentes, atrapados o cómplices, casi unánime-

mente, se dirigieran a la opinión pública magnificando el incidente de las Georgias, alentando a las FFAA a proceder con energía y hasta las últimas consecuencias, con lo que abonaban el terreno para la ocupación de las Malvinas.

Simultáneamente los diarios abrumaban con declaraciones a favor de la preanunciada toma de las Malvinas: Levingston: "El tema de la soberanía argentina sobre las Malvinas se está acercando a una definición...". Massera: "Hace ya tiempo que los hechos deben reemplazar a las palabras...". Gral. Jorge Leal: "Las Malvinas deben ser recuperadas por los argentinos sin esperar más". Roberto Roth: "En el tema de las Malvinas, el país debe terminar con el conflicto, así sea mediante la utilización de la fuerza". Francisco Cerro: "Si este episodio nos une en la defensa del país, también sería positiva una actitud del gobierno de mayor libertad política". Carlos Auyero: "La defensa de la soberanía galvaniza el frente interno más allá de las diferencias que la Multipartidaria puede tener con el gobierno".

La confusión entre los intereses del régimen y los de la Nación alcanza a la mayor parte de la superestructura política. Italo Luder: "Argentina debe responder con toda firmeza en la defensa de los derechos soberanos, hasta las últimas consecuencias". Carlos Contin: "Una determinación extrema puede ser lamentable por sus consecuencias, pero tal vez no haya otra solución". Mario Amadeo: "Corresponde que Argentina adopte las medidas unilaterales necesarias para hacer justicia". Manuel Arauz Castex: "La estrategia nacional debe ser manejada por las personas que se encuentran en los puestos de comando y que tienen la responsabilidad de decidir acerca de los pasos a dar y los medios a emplear". Martín Dip: "Es necesario que esta situación tenga una definición clara, rápida y categórica". Oscar Camilión: "Es indispensable que el gobierno inglés reconozca la necesidad de la restitución de la soberanía de las islas sin dilaciones ni pretextos".

La instrumentación de la maniobra se cumplía con todo éxito.

d) Comienzan los tropiezos

El 30 de marzo se desarrolla la batalla campal en los alrededores de la Plaza de Mayo y en todas las capitales de provincia: los trabajadores enfrentan a la represión por primera vez desde 1976, ganando la calle. Entre las principales consecuencias de esta acción se destaca la unanimidad opositora lograda a nivel popular, que elabora planes de acción inmediatos y prepara nuevas movilizaciones. Mientras, circulan insistentes rumores de golpes de Estado, conducidos por distintos jefes militares y planteando diferentes proyectos. Entre ellos, el de Onganía-Roth, calificado como nacionalista por sus defensores.

Ese mismo día Bittel se hace eco de una preocupación popular: "El pueblo desconfía de los militares, porque olfatea que lo que se está tratando es que las islas Georgias dejen de ser inglesas para ser norteamericanas".

Es probable —casi seguro, de acuerdo a indicios deslizados a través de informaciones de prensa y a la lógica que rige las acciones bélicas—, que la toma de las Malvinas estuviera planificada por lo menos para unos 30 días más tarde. El argumento principal a favor de ello lo constituye el hecho de que el advenimiento del invierno en el mar austral dificulta seriamente toda actividad bélica. Los defensores hubieran podido apostar a pesar de todo el invierno en las islas, prolongando el periodo de negociaciones diplomáticas.

Es difícil determinar porqué la Junta Militar se comportó de tal forma. Puede atribuírse a la agudización de las luchas populares, a sus contradicciones internas, al exacerbamiento de un nacionalismo irracional en algunos de sus miembros con poder de decisión, a reacciones frente al manejo autoritario del poder imperialista, pero todo pareciera indicar que en el momento de iniciar la acción militar propiamente dicha las FFAA actuaron con prescindencia de la opinión de todos los demás implicados en la maniobra.

Las circunstancias obligaban a los militares a modificar cualitativamente la situación, tanto en el frente interno como en el externo.

5. La toma de las Malvinas

En el conflicto de las Malvinas se enfrentan tres contendientes principales, que comparten una misma ideología y aplican una misma doctrina: la del *acto-fuerza* generador de hechos consumados.

En la concepción facista, el equilibrio mundial no es un estado permanente, pero sus cambios no son dialécticos. Son las acciones de fuerza las que lo rompen y lo recomponen de acuerdo al poder de los protagonistas.

En esta concepción idealista no hay mediación entre la ideología y la política, no hay reconocimiento del traspaso dialéctico de una situación a otra. El *acto-fuerza*, generador de un nuevo equilibrio implica un avance a saltos.

Esta es la concepción que aplica el estado de Israel en su relación con los árabes. La que orienta la estrategia de Reagan y Haig en la confrontación

mundial. La que justificó que, en la lucha interna, la Junta Militar promoviera el aniquilamiento físico de la "subversión".

La recuperación militar de las Malvinas por las FFAA argentinas es un típico *acto-fuerza* tendiente, en lo interno, a la subordinación inmediata de la sociedad civil y, en lo externo, a crear una nueva situación de equilibrio frente a Gran Bretaña.

Pero la Junta Militar aplicó esta concepción —que le había dado buen resultado frente al enemigo de clase— a la contradicción con un país imperialista.

Al intento de imponerle a Margaret Thatcher una nueva situación, ésta respondió con otro *acto-fuerza*: la guerra.

Pero el error más grave consistió en no comprender que, con su acción, cuestionaba las reglas del juego del equilibrio estratégico a nivel mundial.

Tanto Inglaterra en Europa como Argentina en América, eran piezas claves de la política internacional que EEUU conduce.

Lo actuado por la Junta Militar colocó al imperialismo frente a una situación inexorable: EEUU —ante la intransigencia de las partes— se vio obligado a optar entre tomar partido, a un alto costo en sus relaciones internacionales, o permitir que se creara un antecedente para circunstancias futuras similares, dando lugar al desorden en el espacio capitalista.

El hecho consumado generó contradicciones incalculables, imposibles de evaluar, irreversibles, lejos de las previsiones de los militares argentinos.

Fuerza por fuerza, Reagan eligió a su mayor aliado en la coyuntura mundial: Inglaterra y la OTAN. Dio por tierra con el proyecto de la OTAS y dejó que aquella lanzara su poderío para destruir a la parte más débil en su esquema de dominación. Por otro lado, Gran Bretaña también le garantiza el control del Atlántico sur. A esta postura se sumó el coro de las naciones desarrolladas.

Lo que fue aplaudido como práctica en la lucha de clases es ejemplarmente reprimido cuando pone en riesgo el orden en que se fundamenta la supremacía imperialista.

Así como en términos globales la ideología imperante en los grandes centros de poder capitalista conduce a la conflagración mundial, en el caso específico de las Malvinas, la ruptura del equilibrio condujo inevitablemente a la guerra.

Norteamérica tiene que aniquilar ahora la vocación hegemónica de Argentina en la región, porque intentó apoderarse de una cuota de poder mayor que la admisible; tiene que dominar a su aliado pero, al mismo tiempo, evitar su destrucción, porque una derrota aplastante de la Junta Militar puede abrir paso al avance de fuerzas sociales que plantean un cambio de sistema, a la potencialidad revolucionaria de la clase obrera argentina.

Independientemente que al interior de la Argentina el objetivo de la recuperación de las Malvinas era espurio, guiado por un estado de necesidad, hacia el exterior —sin tener esa intención— rompe la estabilidad de un área estratégica, y perjudica los intereses de las grandes potencias.

Vista desde la óptica de los países No Alineados y el bloque socialista, la lucha anticolonial de un país del Tercer Mundo contra una nación imperialista, es objetivamente justa. El apoyo de EEUU a la agresión de una potencia extracontinental a un país Latinoamericano, a su vez, rompe con los fundamentos del sistema interamericano.

La situación creada pone en crisis la mayor parte de las alianzas y la diplomacia estadounidense y desnuda la inoperancia de los organismos internacionales, poniendo en evidencia tendencias centrífugas que tienden a su disgregación.

La redefinición de estas alianzas encuentra a Latinoamérica y los países No Alineados en posiciones mucho más antiyanquis y en la afirmación de sus nacionalidades. El conflicto no puede inscribirse en la dinámica de la relación Este-Oeste; está mucho más cerca de la contradicción Norte-Sur.

Todo este cúmulo de situaciones nuevas y contradicciones inesperadas se revierte al plano interno. Por un lado, reduce el margen de maniobra de la Junta Militar. Pero, por otro, contribuye a la confusión de las fuerzas políticas de la oposición.

Si en un primer momento oscilaron entre la euforia nacionalista y una tibia defensa de su espacio propio en las decisiones de importancia nacional cuya potestad ejerce la Junta Militar y llegaron a reclamar elecciones para junio de 1982, se han llamado ahora a sosiego, a no interferir en la conducción de los negocios de la guerra y el Estado, tal vez a esperar ver pasar el cadáver de su enemigo.

Esa pasividad beneficia al gobierno militar, favorece su capacidad de recomposición interna.

Mientras, la movilización popular se politiza, el peronismo "copa" todas las consignas. Se practica una constante gimnasia de movilización, en las que

reaparecen las reivindicaciones políticas y sociales. El pueblo, no se confunde. La CGT, invitada al acto de asunción del mando del gobernador de las Malvinas, responde: "Es público y notorio que el gobierno militar ha reiterado que la CGT no existe. . . Por lo tanto no puede considerar con seriedad ser invitada. . . (no obstante) teniendo en cuenta que los soldados son hijos de los trabajadores. . . resuelve designar a su Secretario General y Adjunto para que hagan llegar un saludo a los soldados. . .". Esta declaración sucede a los pocos días del fallecimiento de uno de los seis heridos de bala en la movilización del 30 de marzo en Mendoza. En Bruselas, Ricardo Pérez ahonda en el análisis de las diferencias entre el conflicto malvinense y la cuestión social: "No olvidamos nuestros objetivos de justicia social. . . No estamos en Europa para defender los puntos de vista de la Junta Militar sobre las Malvinas. Hemos actuado ilegalmente durante años. No tenemos contacto con la Junta, que es una dictadura. . . (Pero) el embargo de la Comunidad Europea contra Argentina afectará al pueblo, que ya sufre por la situación económica y social del país. Sería mejor que Europa tomara medidas contra la violación de los derechos humanos en Argentina". A pesar de la guerra, la Junta se tomó su tiempo para resolver los problemas que para la "unidad nacional" constituía este sector sindical: entregó el edificio de Azopardo, sede histórica de la otrora central obrera más poderosa de Latinoamérica, a los traidores de la CNT-20 y a los blandos de la CGT peronista.

Pese a la censura imperante el intento de hechar un manto de olvido a las violaciones de los derechos humanos también debe enfrentar la movilización popular. El viernes 16 de abril, la Asamblea Permanente por los derechos humanos fijó su posición: "Uno de los fundamentos en que se asienta la vigencia de los derechos humanos es la soberanía nacional. . . La soberanía territorial y la soberanía popular conforman una unidad indivisible en la autodeterminación de los pueblos. Para que tal cosa ocurra deben crearse las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales". Y concluye: "La prolongación del estado de sitio, la no liberación de los presos políticos, el no esclarecimiento de los casos de miles de personas desaparecidas y la no supresión de la estructura represiva —intacta e impune— no conducen a la unión del pueblo argentino, tan necesaria en estos momentos". Las Madres de Plaza de Mayo lanzan una consigna memorable: "Las Malvinas son argentinas; los desaparecidos también".

La Junta Militar no consigue consolidar posiciones en ninguno de los frentes. En el plano internacional el conflicto se ha disparado y condiciona la situación interna. Sclaudeman es acusado de intervenir en los asuntos internos del Estado. Los argentinos levantan claras banderas antinorteamericanas y antiimperialistas. Algunas fuerzas políticas pugnan por recomponer los acuerdos previos a la crisis desatada por la acción militar. La concordancia de la Multipartidaria para acompañar la "salida política" tambalea: nadie quiere com-

prometerse con el fracaso. Se escucha ruido de sables: Viola debe presentarse al Comando en Jefe a desmentir rumores. En el plano externo EEUU aparece como el principal perdedor. En la Comunidad Económica Europea se producen fisuras: Italia, Irlanda y Dinamarca —por diferentes razones— se niegan a atar sus relaciones económicas con el Tercer Mundo al carro belicista de Gran Bretaña. El Granma editorializa sobre el apoyo del Partido Comunista de Cuba a la lucha por la eliminación del enclave colonialista británico en las Malvinas. El costo material y humano de la guerra alcanza límites insospechados para ambos bandos.

Contra todas las previsiones Alemann sigue al frente de la cartera económica. No ha sido liberado ni un solo preso político, ninguna solución se ha encajado a la cuestión de los detenidos-desaparecidos, la legislación represiva sigue incólume, los derechos políticos y sociales continúan abolidos y no sólo no se ha dado concesión alguna a los trabajadores sino que se instrumentan nuevas políticas para su subordinación.

Las Malvinas eran, son y serán Argentinas.

El resultado militar de la maniobra llevada a cabo por la Junta Militar puede terminar en un desastre. Este no implica al pueblo argentino, ni puede determinar el futuro de los derechos soberanos sobre el archipiélago.

Así como la Junta Militar se arroga ilegítimamente la representatividad de los intereses de la Nación, está impugnada para firmar cualquier acuerdo que ponga en peligro nuestros derechos históricos. Sólo un gobierno que exprese legítimamente la soberanía popular puede resolver con autoridad sobre este litigio en que están en juego los intereses de toda la Nación.

6. Los cursos probables de acción

a) El régimen impone su proyecto

El primer curso de acción probable está fundado en la continuidad del Proceso sin cambio en sus características, lo que implica ciertas condiciones específicas de posguerra. La primera y principal es que las FFAA no sufran una derrota aplastante, que les permita revertir sobre la Nación un prestigio ganado en los campos de batalla. Está, en lo político, ligado a la maniobra original, descrita en las primeras páginas. Implica la recomposición de la alianza con EEUU y el bloque imperialista. En lo económico, sólo puede ejecutarse con el apoyo de una importante inyección de capital financiero proveniente de la banca imperialista.

Sea porque fue alcanzado a mitad de camino por la crisis social y la guerra, porque objetivamente la filosofía que lo rige lo oriente al fracaso o porque las correcciones a la ortodoxia liberal para atenuar la tensión social dificultaron su marcha, el plan económico de los gobiernos militares llevó al país al borde del colapso. El sistema requiere tiempo para recomponerse. Pero la conducción estratégica del Proceso tiene tan claro como el campo popular que esta crisis no se resuelve con paños tibios.

La acumulación de capital necesaria para el cumplimiento del programa económico es contradictoria con la posibilidad de un aumento de salarios y la movilización popular. La inflación, las deudas, más los gastos ocasionados por la guerra y la reconstrucción, deberán seguir siendo solventados —de acuerdo a la óptica del neoliberalismo— por vía de la transferencia de recursos. Nada justifica disminuir la tasa de ganancia del gran capital que, por otro lado, hasta la fecha, demuestra conservar la hegemonía en el control del Estado, y desarrolla acciones con vistas al futuro.

El 7 de abril una misión financiera viajó a EEUU para analizar, con instituciones afincadas en Nueva York y Washington, fórmulas para que la Argentina pueda saldar las obligaciones contraídas en Londres. Llevaba la misión de hallar formas de que Argentina, pese a su ruptura con Gran Bretaña, no se atrasara en los pagos de su deuda externa. El 60 por ciento de la deuda pública internacional —20.000 millones de dólares sobre un total de 34.500— fue tomada en Londres y un 25 por ciento corresponde a entidades crediticias británicas. Los vencimientos de fines de abril sumaban, entre capital e intereses, unos 2.500 millones de dólares. La misión del Banco Central debía abocarse a la posibilidad de conseguir que los bancos estadounidenses, japoneses, alemanes y de otras nacionalidades con domicilio de pago en Londres, acepten los giros argentinos sobre Nueva York. Ello, con el fin de no atrasarse en el pago "porque debilitaría la imagen exterior de nuestro país y encarecería el crédito", ya que la misma misión debía rastrear la obtención de nuevos medios de financiamiento externo.

Ese mismo día la señora Thatcher informaba en los Comunes: "Decidimos imponer un embargo a todas las importaciones de la Argentina a partir de medianoche" y reveló que Gran Bretaña realizaba gestiones ante los demás países de la C.E.E. para que se sumen a esa actitud. En 1981 la Argentina exportó al Reino Unido por valor de 260 millones de dólares e importó 350. Las inversiones británicas en nuestro país alcanzan —según el ministerio de economía argentino— a 388.277.321 dólares. Alemann respondió: "La Argentina no adoptará medidas equivalentes, porque si lo hiciera, nuestro gobierno provocaría perjuicios a particulares, que es justamente lo que no queremos hacer". Los principales afectados por esas medidas hubieran sido la Shell, Duperial y los intereses en el país de la Morgan Guaranty Trust, así como las transnacionales industriales y cerealeras Bunge y Born y Dreyfus.

El 20 de abril, en respuesta a un interrogatorio de la revista Newsweek, Alemann restó importancia a las sanciones británicas y europeas contra la Argentina y añadió: "La Argentina no desconoció su deuda con los acreedores británicos y será pagada una vez que Gran Bretaña levante el bloqueo de los fondos". Asimismo aseguró que: "El plan económico no fue modificado ni afectado". Ese mismo día, destacados representantes del establishment partieron rumbo a Europa y EEUU a fin de explicar las consecuencias que pueden provocar las sanciones tomadas sobre la economía argentina; entre ellos se encontraba Adalberto Krieger Vasena, conocido abogado de intereses británicos y ex ministro de economía de la dictadura del general Onganía en 1966.

Si esta situación continúa en la posguerra, la política económica puede adoptar una sola dirección: la profundización de las medidas implementadas dando la gestión de Martínez de Hoz, acelerando los tiempos para alcanzar los objetivos de largo plazo ya descriptos, aunque las correcciones que imponga la coyuntura se darán de acuerdo a la relación de fuerzas en un nuevo marco de la lucha de clases, agravándose la disyuntiva *acumulación* versus *distribución*.

La política económica ultraliberal se encontrará frente a un panorama crítico. Si el desenlace en las Malvinas se produjera pronto, — pese a las previsiones — el equipo económico hallará dificultades serias para la refinanciación de la deuda externa y solventar una deuda interna desproporcionada a la capacidad productiva del país, que continúa deteriorándose. A ello se agregarán los problemas generados con la Comunidad Económica Europea y por la congelación de fondos en Inglaterra. En este marco, tendrá que afrontar los gastos del rearme militar de la República.

Si la guerra se prolonga, tendrá que profundizar las medidas de emergencia, implantando una economía de guerra. Ello implica una estricta planificación económica, el fortalecimiento del Estado y contar con el apoyo popular para resolver carencias y postergar reclamos. Y destinar cuantiosos recursos al mantenimiento de la guerra.

Surge, con toda evidencia, que este curso de acción sólo puede sustentarse en la consolidación de los acuerdos con el campo capitalista en la perspectiva de conseguir el famoso "mini plan Marshall" que, se ha rumoreado, traería en su portafolios el "candidato de la conciliación": Alejandro Orfila u otros que se han perfilado en los últimos tiempos.

Pero, como reaseguro, implica además el fortalecimiento del aparato represivo interno, ya que los beneficios de la inversión extranjera no alcanzarían a las capas más desposeídas.

No obstante, aunque aún no se visualizan otras perspectivas, parece ser *el más improbable* de los caminos posibles.

b) El cambio gatopardista

El *segundo* de los cursos probables de acción que analizaremos está relacionado a las contradicciones internas del bloque de poder — presentes durante el transcurso de la guerra — inevitables en la posguerra. Estas afectan principalmente a las FFAA.

En el terreno bélico, la guerra y sus consecuencias plantean a las instituciones militares una cuestión expresada en una ley de hierro del *pensamiento clauseviano*: la compatibilidad de los medios con los fines.

Al reivindicar las FFAA en la coyuntura bélica su condición de fuerza destinada a la defensa de la Nación — impostura destinada a preservar los intereses del régimen y así evitar su eclipse —, se enfrentan a una contradicción ineludible: en la ideología de la guerra *son inseparables los objetivos y los medios*. Y las necesidades circunstanciales del régimen, entran en colisión con los *intereses permanentes de la institución*.

Frente al conflicto de las Malvinas el Estado Mayor Conjunto ha planteado un modelo de guerra de medios. El esfuerzo de la batalla está basado en recursos altamente tecnificados.

El patrón económico ejecutado por Martínez de Hoz, Sigaut y Alemann profundiza la debilidad de la logística y la industria estratégica argentinas para la guerra contra un enemigo exterior y acentúa la dependencia de insumos, manufacturas, tecnología y recursos humanos de las Fuerzas Armadas.

En el escenario bélico de las Malvinas las contradicciones enunciadas se manifiestan de la siguiente forma:

En la primera etapa — toma y ocupación de las islas — la infantería de marina y la infantería ocupan el rol fundamental en la batalla. La armada y la fuerza aérea cumplen misiones secundarias — transporte, protección de la operación. Pero en la segunda — mantenimiento del espacio ocupado — la aeronáutica y la marina (altamente tecnificadas) ingresan al escenario bélico como fuerzas de ataque con el fin de hacer posible la defensa de la infantería.

Los aviones de combate son de fabricación francesa, israelí, italiana y estadounidense; los blindados son de la General Motors norteamericana; el grueso de los tanques livianos provienen de Francia y de la firma alemana occidental Marder, ensamblados por Fabricaciones Militares; la flotilla de fragatas está compuesta por embarcaciones alemanas e inglesas; los destructores son norteamericanos e italianos; el portaviones es de origen inglés; los submarinos son alemanes y norteamericanos y la mayor parte de las lanchas, al igual que los helicópteros, son de distintas procedencias, pero no se fabrican en el país.

La Argentina no produce los medios en los que asienta su esfuerzo bélico: en ello radica la perspectiva de la derrota en el plano militar. En el plano político, la victoria está vinculada a la posibilidad de una auténtica coincidencia nacional que supere la fractura de la sociedad argentina y abra la conducción del conflicto a la decisión democrática del pueblo. Pero ello supone la derrota interna de la institución militar, a la que sólo cabe disolver como partido, desarticulándolo para siempre para evitar el retorno de nuevos proyectos reaccionarios.

De acuerdo a esto, el desenlace de la guerra ofrece sólo dos alternativas lógicas: el establecimiento de un *status belis* duradero favorecido por el invierno en las islas y un largo proceso de negociaciones diplomáticas o la derrota militar sin atenuantes.

En el primer caso, el sostenimiento de una economía de guerra y la reposición del aparato bélico mediante un incremento ilimitado del armamentismo, implica el derrumbe del *régimen*: los objetivos del Proceso se vuelven incompatibles con los de la guerra. El segundo, irá inevitablemente acompañado de la caída de Galtieri y de una intensa crisis del Estado.

Estas contradicciones, implantadas en el seno de las instituciones armadas y que las enfrentan a los diferentes sectores del bloque de clases dominante, pondrán en cuestión el cumplimiento de los demás objetivos de la maniobra político-militar implementada alrededor de la toma de las Malvinas.

Estas consideraciones permiten analizar un curso de acción probable diseñado a partir de la recuperación de la iniciativa militar en la contradicción dentro del régimen.

Aunque las FFAA actuaron solidaria y unánimemente en la represión y sustento del Proceso y deberán asumir como institución el juicio de la historia, existen en su interior diferencias sobre la evaluación de lo actuado y respecto del camino a seguir. La más importante de ellas es la que separa a los oficiales que, respaldados por la institución y su ideología, se han integrado al *establishment*, compartiendo con los civiles las diferentes instancias de conducción de empresas, negocios y peculados, y aquellos que tuvieron como destino unidades combatientes y se hallan menos comprometidos con intereses económicos en la continuidad del Proceso. Todos, en mayor o menor grado, fueron partícipes de la "guerra sucia", pero estos últimos aspiran a alcanzar un pie de igualdad con los banqueros, financistas y conductores del Estado en sus niveles administrativos. Pretenden terminar con el intermediarismo, dejar de ser testaferros militares del *establishment* y ganar capacidad directa de decisión en los negocios de la Nación.

Otras contradicciones menores separan a los defensores a ultranza de los métodos para militares en la ejecución de la guerra a la "subversión" y quienes proponían ejercerla con recursos legales, fundados en una legislación *ad hoc*

que diera legitimidad a las acciones de exterminio físico de los militantes populares. Durante el desarrollo de la guerra interna algunos oficiales fueron separados de sus cargos efectivos y desplazados por otros más decididos y ambiciosos y muchos otros fueron relegados por el desaliento que sucedió a las últimas acciones de la guerra interna cuando el Proceso se estancó económica y políticamente. Por último, están los "cruzados de la guerra santa" que continúan combatiendo en El Salvador o Nicaragua y aquellos que pretenden tomar distancia de los crímenes que han cometido o convalidado y hacer recaer estas responsabilidades sobre otros miembros de la institución.

Entre las intenciones de la maniobra política que acompañó la "operación Malvinas" se cuenta la de recuperar el monolitismo de las instituciones militares. Para ello, se trató de emblocarlas alrededor del interés permanente de recuperar para las FFAA la condición de nacionales.

Pero el retorno de la fuerza armada, de policía interna a defensora del interés nacional, le impone una modificación de su ideología, única forma de superar la contradicción entre los medios y los fines.

De acuerdo a la descripción delineada en el capítulo dedicado a analizar los objetivos de la maniobra, el ejército, para recuperar las estructuras que lo hagan hábil en la defensa del interés nacional, debe romper con los moldes adoptados a partir de la reforma de los reglamentos operacionales impuesta en 1964 por el entonces Comandante en Jefe, general Onganía, que establece la seguridad del orden interno como prioridad en los objetivos de la guerra. De esta forma, se modificarían las relaciones de las instituciones armadas con el conjunto de la sociedad civil.

Para resolver la contradicción en que se hallan, las FFAA deberían retornar a la ideología del capitalismo de Estado y cambiar la ejecución de su política en lo social a través de una alianza con la civilidad.

El camino para ello está abierto: los oficiales y suboficiales combatientes pueden imputarle a los Estados Mayores su mala administración de la guerra y el Estado. Ello implica la caída de Galtieri y parte de los altos mandos y su reemplazo por los jefes que participaron en las dos guerras: la represiva y la malvinense.

Es decir, cualquiera sea el destino del enfrentamiento con Gran Bretaña, puede abrirse un curso de acción en el cual las FFAA se eleven como fuerza reparadora en el orden social y político.

7. Las alternativas del campo popular

a) La respuesta al continuismo del Proceso

Poniendo la prioridad en el recambio del equipo económico, los partidos políticos y demás expresiones superestructurales de la sociedad civil, juegan a ganar en río revuelto. La desvinculación de masas de los partidos, la debilidad de las conducciones sindicales, la falta de un proyecto revolucionario, reducen las posibilidades populares de acceder a mayores cuotas de poder frente a la fragilidad del régimen. La falta de cuadros medios ocasionada por la feroz sangría de la guerra interna y el congelamiento de las conducciones promovido por el gobierno en los partidos políticos, contribuyen a ello.

Sólo las Madres de Plaza de Mayo y los auténticos dirigentes de la clase trabajadora —asentados en la crisis— han mantenido posiciones inflexibles. Las primeras, elevando una consigna que puede ser asumida por el conjunto de las fuerzas revolucionarias: "Las Malvinas son argentinas; los desaparecidos también". Los segundos, negándose a subordinar la reivindicación de los intereses sociales a una "unidad nacional" conducida por las FFAA. Para ambos, el continuismo regiminoso tiene reservado el silencio y la represión. Lo mismo que para los numerosos núcleos sindicales de base y agrupaciones internas de los partidos que impulsaron posiciones combativas en las "movilizaciones patrióticas" instrumentadas.

En el campo opuesto, la maniobra desarrollada con la toma de las Malvinas proyecta a las FFAA hacia la recuperación de la iniciativa en el seno del bloque de poder, a consolidar su cohesión y a asumir la hegemonía en la conducción de la política nacional en todos los frentes. Les resta no salir excesivamente desfavorecidos de la guerra y obtener financiación para superar la coyuntura económica.

No obstante, para promover una "salida política" al Proceso requieren alguna cuota de consenso. La adhesión de la superestructura política no les ahorrará problemas en lo social. Estos se fundamentan en la hondura de la crisis económica y la falta de esperanzas en un cambio de situación promovido por los actuales conductores de la economía o sus testaferros.

Sin otorgar un mínimo de atención a estos problemas —se ha visto en todo el proceso de movilizaciones que se intentaron despolitizar—, cualquiera sea el resultado de la guerra, no será posible un "acuerdo patriótico" que les conceda respiro para ejecutar las etapas siguientes. El proceso, tal como lo conocemos, está terminado, aunque la miopía de las clases dominantes no les deje verlo. Si el "mini-plan Marshall" sólo alcanza para la reconstrucción de la posguerra y la reactivación del proceso de acumulación capitalista, como es previsible, detener la movilización ya lanzada reclamará nuevas cuotas de represión, que pueden justificarse con argumentos patrioterros.

En cambio, si las FFAA promueven algunos cambios en las condiciones sociales y económicas de las capas más afectadas por la crisis, éstos serán interpretados como el saldo favorable de las luchas populares y realimentarán el circuito reivindicativo y político. Y si se produce una "apertura política" y una fugaz primavera económica, las fuerzas populares pugnarán por su ampliación, como históricamente ha ocurrido, alentadas y alentando su propio avance.

La carrera entre los defensores del Proceso y las posibilidades de un estallido social de características imprevisibles se habrá largado.

Su punto de partida, sin embargo, está dado por una crisis sin precedentes y una gran vulnerabilidad del régimen, corroído por sus contradicciones y convescente de una casi segura derrota militar.

b) La respuesta a un cambio gatopardista

Un cambio en la ideología militar imperante no garantiza —sin embargo— una modificación radical en la orientación del futuro régimen. Esto es independiente de la profundidad de las contradicciones puestas de manifiesto en el interior de las instituciones armadas: hay valores que en su concepción son inamovibles, principios de su formación irreversibles, compromisos con la historia inmediatamente pasada no negociables. Pero la intensidad de los enfrentamientos que se sucederán entre las fracciones militares (que pueden llegar hasta una sanción ejemplarizadora sobre los más destacados actores de la "guerra sucia") generarán confusiones en el campo popular a las que es bueno adelantarse. El populismo tiene mil rostros, entre otros el del *nacionalismo reparador*.

No se nos escapa que, si bien el método de dominación es similar en toda Latinoamérica, las respuestas sociales de cada país son diferentes. Y, en Argentina, deben tomarse en cuenta el extraordinario dinamismo de la sociedad civil y su estructura económica que, en parte, le ha permitido adaptarse y sobrevivir a la implacable gestión de los equipos liberales durante seis años. La configuración de las clases (donde juega un rol protagónico el peso de la obrera), la estructura económica asentada en por lo menos 40 años de desarrollo de una economía integrada, la intensidad de los conflictos interburgueses (puestos de manifiesto con crudeza en estos dos últimos años) y la debilidad del establishment (que carece de apoyatura social en un partido conservador con consenso, rol que deben asumir los militares), constituyen contrapartidas importantes a las transformaciones introducidas en el aparato productivo y la sociedad argentinas para adaptarlas al modelo mundial vigente.

Estos cambios no eliminan las contradicciones; modifican el comportamiento social en la lucha de clases y exigen una adecuación de las tácticas y

estrategia populares. Reclaman, sobre todo, tener en claro que, mientras no se rompa la cadena que articula el capital financiero internacional, no habrá liberación nacional. Y las nuevas formas de dominación son perfectamente compatibles con un proyecto nacionalizante, estatista y planificador de la economía. Nacionalizar puede significar, en este entorno, acentuar las ligazones con la banca internacional. Los déficits, la inflación mundial, las crisis del capital transnacional, las seguirá pagando el pueblo; la transferencia de salarios para realimentar el ciclo de acumulación capitalista no se revertirá.

Los costos de la guerra, por otra parte, consolidan la cadena endeudamiento-devolución de la deuda-endeudamiento, que forma parte de la misma política de sometimiento imperialista. Y está íntimamente ligada al argumento de la potencialidad estratégica bélica de un ejército al servicio de los intereses nacionales.

Advertir —entonces— ante un cambio gatopardista de la ideología militar en la postguerra, es lo mismo que decir que *no hay proyecto nacional autónomo que pueda ejecutarse sin ruptura con la estructura de dependencia financiera en que las economías nacionales están insertas*. No hay programa de reactivación económica nacional que pueda triunfar si no parte de quebrar el espinazo a la estructura de esta dependencia en el interior de la Nación.

La advertencia adquiere singular proyección frente al hecho previsible que el fin de la guerra promoverá un reacomodamiento de la situación de las diferentes fuerzas políticas. Estas, portadoras de diferentes proyectos alternativos pero débiles para impulsarlos, lucharán por la obtención de mayores cuotas de poder en el proceso abierto por la política reparadora de las FFAA y terminarán subordinadas al liderazgo de éstas sobre la sociedad. La gestión de muchas de ellas —para justificar su inserción en el Estado— tenderá a convalidar, con argumentos "de gauche", la nueva orientación del poder militar. Y, en algunos sectores del peronismo, renacerá el "encanto" por los "coroneles nacionalistas".

Lo importante es prestar atención a la siguiente circunstancia: la crisis que se procesa en el interior de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales a causa de la contradicción entre los que adhieren al proyecto de las FFAA en la coyuntura bélica y la posguerra y los que no postergan sus actividades opositoras y aprovechan la debilidad momentánea militar en el frente interno, será la partera de la corriente revolucionaria en embrión que contienen todas las expresiones de la política argentina. Esta crisis, favorecerá una descomposición precursora de una recomposición más acorde con los intereses sociales que las diferentes fracciones de los partidos políticos y estructuras gremiales expresan. Es decir: de un lado se alinearán los intransigentes; frente a ellos, compartiendo exiguas cuotas de poder otorgadas por el régimen, se ordenarán los derrotados ideológicamente por el "realismo político".

En estas circunstancias el ejército, con su "nacionalismo reparador" destinado a sepultar la historia de los trágicos años pasados, intentará recuperarse de la guerra y proyectar su modelo hacia el futuro. En el otro campo, los revolucionarios, deberán abocarse a la tarea de construcción de la organización, la doctrina, la estrategia y el proyecto de un nuevo orden que surja del derrumbe del modelo militar y de cambios estructurales que cierren el camino a su retorno. Y esa carrera empieza hoy, no dándole tregua a las FFAA para recomponerse de las pérdidas que está sufriendo en todos los frentes.

El bloque de clases dominante reconstituido puede asumir la forma de un gobierno cívico militar, de un gobierno civil de transición o de un gobierno militar con participación civil, pero no sería otra cosa que la continuidad política del Proceso, recompuesto en sus objetivos internos, no en los que hacen a su dependencia e integración al modelo imperante a nivel mundial. Constituirá una nueva forma de prolongar la vida del sistema, no un proyecto de transición para reemplazarlo; será un obstáculo y no un medio en la construcción de una sociedad justa, libre y soberana. Habrá que destruirlo para hacer el país que aspiramos: la patria socialista.

Si la Multipartidaria —como coalición orientada principalmente a la obtención de libertades democráticas dentro del esquema liberal— constituyó un avance de la sociedad civil en la lucha antidictatorial, la unificación de las fracciones más intransigentes de los partidos que la componen —principalmente el peronismo y el radicalismo— abrirá el camino a la superación de los topes actuales del campo popular: la carencia de un proyecto alternativo y de instrumentos para llevarlo a la práctica. Este reagrupamiento de la oposición será esta vez ideológico, no político. Incluye la clarificación de las tendencias operantes y la perspectiva de avanzar con propuestas que redunden en niveles más efectivos de lucha.

La evolución dialéctica de las expresiones que proponen un cambio estructural en la Argentina tendrá a su favor el interregno de tiempo que requiere el Proceso para alcanzar sus objetivos, incorporándole a esa marcha, a la vez, dificultades crecientes. Las disputas internas que surgirán en el heterogéneo bloque reconstituido de poder, actuarán como factor supletorio de las carencias de expresión superestructural de las fuerzas revolucionarias, que deberán aprovechar todas sus contradicciones. Nuestra fortaleza en la lucha de clases es también la debilidad enemiga. Por ello, donde éste es fuerte, replegarse; donde es débil golpearlo. Hoy está más deteriorado que nunca en el frente político y social interno.

Los dirigentes sindicales que han sabido mantener su integridad durante la etapa de la guerra, las regionales de la CGT del interior del país, los núcleos sindicales de base, proyectarán su poder promoviendo una reconstitución democrática de las fuerzas políticas, especialmente el peronismo. Más ligados a

las bases populares, conducidos por una joven dirigencia templada en el enfrentamiento social más brutal del siglo, estas expresiones de oposición ampliarán la capacidad de representar los intereses y aspiraciones populares de los partidos. Constituyen el principal obstáculo a la demagogia propia del "nacionalismo reparador", sustentada en la negación de una auténtica democracia.

Hoy, reconocer en la Junta Militar el derecho a ser destinatario de la defensa de la soberanía nacional —cuando insiste en negar la soberanía popular— es consolidar su proyecto, contribuir al cumplimiento de sus objetivos, detener su deterioro. La actitud que en estos días ponen de manifiesto las organizaciones populares, perfilan su comportamiento futuro. La lucidez antiimperialista de las masas desglosa con perfecta claridad entre las formas de oposición que en realidad son propuestas de volver a la dependencia del amo yanqui y aquellas dirigidas a conformar un nuevo orden social.

Así, el momentáneo congelamiento de la actividad política revierte en su radicalización. Ganar para el consenso al programa reparador de las FF.AA. a la dirigencia que hasta hoy ha llevado el peso de la oposición superestructural, es una victoria pírrica.

El campo popular, reconstituido con sus mejores cuadros, aspirará al máximo: quebrar el sistema, expropiar a la oligarquía, fortalecer el Estado, acumular en beneficio de la justicia social. Para ello debe dificultar por todos los medios la reconstrucción del poder militar.

El tiempo está a nuestro favor. Las fuerzas del régimen lo necesitan para alcanzar sus objetivos de largo plazo, sin los cuales no habrá estabilidad. Pero la reimplantación del proyecto reaccionario deberá enfrentarse con el nivel de organización alcanzado por las fuerzas populares en ese mismo periodo.

CONTENIDO

Prólogo	7
1. Los objetivos globales del programa económico y su crisis	11
a) Consecuencias de la política económica sobre las clases media y obrera	13
b) Contradicciones dentro del bloque de clases dominante	14
c) El resquebrajamiento del poder militar	14
2. El estallido popular del 30 de marzo	14
a) Sus prolegómenos	14
b) Sus consecuencias	16
3. Los objetivos buscados con la toma de las islas Malvinas	17
a) Objetivos estratégicos	17
b) Objetivos económicos	19
c) Objetivos políticos	21
4. La instrumentación política de la maniobra	22
a) Algunos datos sobre la trascendencia de la maniobra	24
b) Orfila: figura de recambio	27
c) El papel asignado a los partidos políticos	28
d) Comienzan los tropiezos	29
5. La toma de las Malvinas	30
6. Los cursos probables de acción	34
a) El régimen impone su proyecto	34
b) El cambio gatopardista	37
7. Alternativas del campo popular	40
a) La respuesta al continuismo del Proceso	40
b) La respuesta a un cambio gatopardista	41